

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Casos representativos y soluciones de mejora



MARÍA DE LOS ÁNGELES CERVANTES ROSAS*

MARIO GONZÁLEZ ARENCIBIA**

EMILIO HORACIO VALENCIA COROZO***

DOI: <https://doi.org/10.52501/cc.359.16>

Resumen

Los derechos humanos son fundamentales para la convivencia armónica en la sociedad, pero se requiere que las instituciones estén fortalecidas para impartir paz y justicia, para que generen confianza y la sociedad civil participe de manera segura en la dinámica social. La Agenda 2030, en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluye el ODS 16 que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, con instituciones sólidas que garanticen el acceso a la justicia para toda la población. En este capítulo se hace un análisis de este objetivo y por medio del estudio de casos y la revisión de literatura, se expone la situación de América Latina incluyendo México, Ecuador, Colombia, Guatemala y Brasil; África y Asia. Entre los principales resultados se encontró corrupción, impunidad, debilitamiento del estado de derecho, violencia y amenazas de grupos armados. Se propone fortalecer el sistema judicial, promover la transparencia y rendición de

* Doctora en Ciencias Administrativas. Profesora-investigadora adscrita a la Universidad Autónoma de Occidente, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3338-4816>. maria.cervantes@uadeo.mx

** Doctor en Ciencias Económicas. Profesor de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Centro de Estudios de Gestión de Proyectos y Toma de Decisiones, La Habana, Cuba. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9947-7762>

*** Doctorante en Ciencias de la Administración. Profesor del Instituto de Altos Estudios, Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5886-1267>

cuentas, fortalecimiento de la capacidad institucional, respeto a los derechos humanos, combate a la corrupción, promoción de una cultura de integridad y ampliación de la participación ciudadana, así como empoderar para promover la denuncia y el rechazo a los actos de corrupción, para atender estos desafíos. A manera de conclusión se rescata la importancia de involucrar a la sociedad civil, los gobiernos y la comunidad internacional, a fin de atender estos desafíos, que son una parte esencial del logro del desarrollo sostenible y la Agenda 2030.

Palabras clave: *Agenda 2030, gobernanza, grupos de interés.*

Introducción

En un mundo marcado por la corrupción, impunidad y violencia, es urgente el respeto a los derechos humanos para garantizar una sociedad libre y que pueda desempeñarse en un mundo de paz. Según el Banco Mundial (2023) y tomando como base, datos de 2021, las tasas más altas de homicidio intencional se ubican en América Latina y el Caribe, siendo Jamaica, Santa Lucía y Honduras los que sobresalen con 52,13, 38,96 y 38,25, respectivamente. Las tasas más bajas las tienen Bolivia y Chile, con 3,49 y 3,63. Sin embargo, también se menciona que no existe información de todos los países y que la tasa es por cada 100,000 habitantes. Rettberg (2020) analiza los impactos de la violencia en América Latina y la define como un problema histórico y heterogéneo, que ha ido incrementándose; y está representado por delincuencia, violencia en sus diferentes formas, pandillerismo, desapariciones, represión y asesinato de defensores de los derechos humanos y periodistas, el crimen organizado y la guerra entre carteles. Esta situación es compartida por varios países por lo que las personas sienten temor de realizar las actividades diarias, de transitar por lugares considerados violentos, pero también de invertir para crear más empresas.

Cuando la ciudadanía percibe que las instituciones estatales no son confiables o responsables, se debilita su legitimidad y se desalienta la participación cívica, lo cual dificulta abordar efectivamente los problemas relaciona-

dos con los derechos humanos. En este ámbito subyacen variados campos por investigar, entre ellos, la necesidad de análisis de los desafíos institucionales y de gobernanza que afectan el respeto y la protección de los derechos humanos, incluyendo la corrupción, la falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas (Rothstein y Teorell, 2008).

También sobresale, como foco a examinar y buscar soluciones, avanzar en la evaluación de la eficacia de los sistemas judiciales y su capacidad de garantizar el acceso a la justicia y la reparación de violaciones a los derechos humanos para todos los ciudadanos (Hammergren, 2007). Por ello este capítulo aborda el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 denominado “Paz, justicia e instituciones sólidas”, donde se incluyen algunos casos representativos de la situación actual y soluciones que se tendrían que implementar para obtener resultados positivos.

Instituciones sólidas, derechos humanos y desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible implica alcanzar un equilibrio en lo económico, social y ambiental de tal manera que exista un crecimiento económico que se pueda mantener y que no acabe con los recursos limitados con que cuenta el planeta. Para ello se requiere una buena gobernanza que preste servicios públicos, a fin de que la sociedad tenga bienestar, seguridad y protección a las personas respecto a los derechos humanos, para que puedan convivir en sociedades pacíficas e inclusivas; sin embargo, lo que se observa en el mundo es corrupción, conflictos y carencias en los servicios prestados por el Estado (Sachs, 2015). Todos estos graves problemas se resolverían mediante el cumplimiento de la Agenda 2030, que es un plan de acción, un modelo de desarrollo que busca lograr el crecimiento económico con el menor costo ambiental posible. Está constituida por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Lizama (2024) menciona que dicha agenda es un referente para la ciudadanía y que la implementación a escala local facilita la transformación del país. Uno de los ODS que incluye esta agenda es el ODS 16, que plantea la construcción de sociedades basadas en los derechos humanos e

instituciones sólidas que puedan garantizar justicia, mientras se avanza en el resto de los objetivos para alcanzar el anhelado desarrollo sostenible.

Existen en la literatura algunas investigaciones que abordan el tema. Al respecto, el estudio realizado por Sanabria (2023) analiza los retos y oportunidades en la implementación del ODS 16 en América Latina y su relación con los derechos humanos. Como principales resultados menciona las dificultades para aplicarlo por la violencia, el crimen organizado, la corrupción y la falta de transparencia en las organizaciones encargadas de impartir justicia, la urgencia de que las instituciones respondan a las necesidades de los ciudadanos en el marco de los derechos humanos, el desarrollo del estado de derecho para acabar con las graves problemáticas como la corrupción y el crimen organizado.

Asimismo, destaca lo ambicioso del objetivo al incluir trata de personas, flujos de dinero provenientes de actividades ilícitas, registros de nacimientos y leyes y políticas no discriminatorias, que es muy amplio. También señala que falta incluir en los indicadores la reducción de las cifras de femicidio y los ataques a los defensores de los derechos humanos, ambientalistas y periodistas.

Respecto a los indicadores sobre corrupción, los enfoca solamente en funcionarios públicos, cuyos resultados se ven afectados por la corrupción; recomienda se enfoque en las políticas anticorrupción, sus resultados y la evasión fiscal por corrupción transnacional. Entre las conclusiones rescata el concepto de paz como una condición para que se pueda lograr el desarrollo sostenible.

Balderas (2024) analiza la integridad, las instituciones sólidas y la transparencia señalando la importancia de la rendición de cuentas y el acceso a la información para el logro del ODS 16. Aborda la corrupción y su evolución a través del tiempo como un asunto cultural, señalando que es una parte de la negociación con la autoridad; lo cual genera desconfianza y baja participación ciudadana. Por otro lado, Villanueva (2019) examina la implementación del ODS 16 y los compromisos de cooperación internacional dándole un carácter “habilitador” a este objetivo por considerarlo, junto con el ODS 17, primordiales para alcanzar el resto de los objetivos; y hace el llamado a tomar con seriedad la transformación de las sociedades. Finalmen-

te, menciona la urgente necesidad de alinear todas las acciones de gobierno a los ODS, como una manera no sólo de aportarle a la Agenda 2030, sino de hacer compromisos para el logro del desarrollo sostenible.

ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas

Entre las principales metas de ese objetivo se incluye la reducción de todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad asociadas, promover el estado de derecho, luchar contra la delincuencia organizada, reducir la corrupción y el soborno, crear instituciones eficaces y transparentes, garantizar acceso a la información, promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias, entre otras (Naciones Unidas, 2018). En el caso de México, como parte de la estrategia nacional, se asume el compromiso de fomentar una cultura de protección a los derechos humanos, la rendición de cuentas e impulsar la participación de la ciudadanía. De tal manera que todas las personas tengan acceso a justicia y servicios de calidad, donde los niveles de violencia y delincuencia se habrán reducido para el 2030 (JOP, 2019). En ese mismo sentido, el Nuevo Pacto para el Futuro, que se centra en temas como seguridad y paz, establece la urgencia de una sociedad más justa, inclusiva, donde se garantice la seguridad y el respeto a la dignidad de las personas (Naciones Unidas, 2024).

El Informe sobre Desarrollo Sostenible (2024) señala que sólo 16% de los ODS tienen un avance que garantiza su cumplimiento, si siguen igual. En el caso del ODS 16, el único indicador que se ha logrado es el de la exportación de armas en gran cantidad, no hay avances en homicidios, control de crimen, acceso a la justicia y en expropiaciones legales compensadas adecuadamente.

Metodología

Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura en diversas bases de datos, empleando palabras clave para identificar los factores que dificultan el fortalecimiento del estado de derecho, así como para explorar soluciones in-

novadoras a esta problemática. Del total de artículos, informes de investigación, capítulos de libro, libros y otros documentos, sólo se tomaron los más relevantes para ejemplificar el estado del ODS 16 en América Latina, África y Asia; y las soluciones para mejora alineadas a la Agenda 2030 y el ODS 16. Con ellos se plasman los resultados que se presentan a continuación.

Resultados y discusión

Estudios de casos concretos de países

América Latina

América Latina ha sido una región particularmente afectada por los desafíos institucionales y de derechos humanos. En Latinoamérica, la región se caracteriza por una alta concentración de riqueza y una profunda desigualdad social, económica y territorial, lo que limita las oportunidades de desarrollo para amplios sectores de la población (CEPAL, 2022). Además, la debilidad institucional, reflejada en la corrupción, la falta de transparencia y la deficiente rendición de cuentas, obstaculiza la implementación efectiva de políticas públicas y la protección de los derechos humanos (Transparency International, 2023). Particularmente, los grupos indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidad y la población LGBTIQ+ enfrentan discriminación y exclusiones que limitan su acceso a derechos básicos y oportunidades de desarrollo (CIDH, 2023).

Por ejemplo, en México, la corrupción generalizada y la falta de independencia judicial han permitido la impunidad de violaciones graves a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas (Amnistía Internacional, 2020). En este sentido, un estudio de Transparency International (2022) reveló que México ocupa el lugar 124 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, lo que refleja los altos niveles de corrupción que obstaculizan el fortalecimiento de las instituciones.

Por ejemplo, un estudio de la CEPAL (2021) señala que Ecuador ha enfrentado problemas de corrupción e impunidad que han debilitado las ins-

tituciones públicas y obstaculizado el respeto a los derechos humanos. Según un informe de Amnistía Internacional (2022), defensores de derechos humanos en Ecuador han sido víctimas de amenazas, ataques y criminalización por su labor de denuncia. Adicionalmente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2020) ha destacado la necesidad de fortalecer la independencia del Poder Judicial en Ecuador para garantizar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas.

Por otro lado, en Colombia, los líderes sociales y defensores de derechos humanos enfrentan altos niveles de violencia y amenazas por parte de grupos armados, que obstaculizan su labor (Human Rights Watch, 2022). Según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2021), entre 2016 y 2020 se registraron 608 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, lo que evidencia la falta de protección y el debilitamiento del estado de derecho en ciertas regiones del país.

Para abordar estos desafíos, se propone implementar políticas redistributivas progresivas, fortalecer la protección social y promover la inclusión económica para reducir las brechas sociales y económicas (CEPAL, 2022). Asimismo, es fundamental combatir la corrupción, promover la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas mediante reformas institucionales, mecanismos de participación ciudadana y el empoderamiento de la sociedad civil (Transparency International, 2023). Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel crucial en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la transparencia, la exigencia de rendición de cuentas a los gobiernos y la denuncia de abusos y en la promoción de soluciones.

En Guatemala, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), trabajando junto a la sociedad civil, logró investigar casos de corrupción de alto nivel, generando avances (Open Society Foundations, 2019). Según un estudio de la CEPAL (2020), la participación de la sociedad civil fue clave para fortalecer la independencia y capacidad de la CICIG, demostrando la importancia del activismo ciudadano en la lucha contra la corrupción.

Por su parte, los pueblos indígenas de la región han luchado por la protección de sus derechos territoriales y culturales, enfrentando a menudo la

criminalización de su activismo (IWGIA, 2021). Un informe de Amnistía Internacional (2022) señala que, en países como Brasil, Guatemala y México, los defensores indígenas de derechos humanos han sido víctimas de amenazas, ataques y asesinatos, lo que refleja la vulnerabilidad de estos grupos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección.

Sinergias y tensiones entre desarrollo sostenible, fortalecimiento institucional y derechos humanos

Si bien el fortalecimiento de las instituciones y el respeto a los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo sostenible, en la práctica se han presentado tensiones. Por ejemplo, en Brasil, los esfuerzos por promover el crecimiento económico mediante la explotación de recursos naturales han entrado en conflicto con los derechos de las comunidades indígenas y el cuidado del medio ambiente (CEPAL, 2020). Según un estudio de la OCDE (2019), esta situación ha generado graves violaciones a los derechos humanos y ha obstaculizado el avance hacia un desarrollo sostenible e inclusivo.

La realidad evidencia que los desafíos institucionales y de derechos humanos en América Latina han sido profundos, pero también han surgido importantes experiencias y soluciones lideradas por la sociedad civil y los grupos vulnerables. Abordar estas problemáticas de manera integral, considerando las sinergias y tensiones con el desarrollo sostenible, es crucial para avanzar hacia sociedades más justas y resilientes.

África

En África, la fragilidad institucional, la debilidad del estado de derecho y los conflictos armados son factores que obstaculizan el desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos (Mo Ibrahim Foundation, 2023; UA, 2023). Además, la pobreza extrema y el limitado acceso a servicios básicos como educación, salud y agua potable, son desafíos apremiantes

(FAO, 2023). Para abordarlos, se requiere fortalecer las instituciones, promover la paz y la estabilidad, e invertir en el desarrollo humano.

Asia

Por otro lado, en Asia, el rápido crecimiento económico no ha sido acompañado de una distribución equitativa de los beneficios, generando desigualdades sociales y exclusiones (Asian Development Bank, 2023). Asimismo, la degradación ambiental y la vulnerabilidad al cambio climático son problemas acuciantes que amenazan la seguridad y el bienestar de las poblaciones (UNEP, 2022; ESCAP, 2022). Para avanzar hacia un desarrollo sostenible, es necesario promover un crecimiento económico inclusivo, transitar hacia una economía verde, fortalecer la adaptación al cambio climático y mejorar la gobernanza ambiental (World Resources Institute, 2023).

En todos estos contextos, la participación activa de la sociedad civil y de los grupos vulnerables es fundamental para la defensa de los derechos humanos, la promoción de la justicia y la construcción de instituciones sólidas. Asimismo, es crucial encontrar un equilibrio entre los objetivos de desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la garantía de los derechos humanos, a fin de avanzar hacia un futuro más justo y sostenible.

Soluciones para mejorar la gobernanza, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, alineadas con la Agenda 2030

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la búsqueda de propuestas concretas para mejorar la gobernanza, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos se vuelve una tarea crucial. Estas dimensiones son pilares fundamentales para construir sociedades justas, equitativas y resilientes, en línea con los objetivos de la Agenda. A continuación se presentan propuestas para la mejora de estos indicadores.

Fortalecer la independencia judicial

Según Méndez (2018), el fortalecimiento de la independencia judicial es fundamental para garantizar el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Es necesario implementar salvaguardas legales y mecanismos institucionales que protejan a los jueces de injerencias políticas o de otro tipo, así como asegurar su capacidad de tomar decisiones de manera imparcial y autónoma.

Promover la rendición de cuentas y la transparencia

Samper (2016) y Zamora (2013) señalan que la implementación de mecanismos efectivos de rendición de cuentas por parte de las autoridades es clave para combatir la corrupción, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el disfrute de los derechos humanos. Esto implica el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación, así como el acceso público a información sobre la gestión gubernamental.

Fortalecimiento de las instituciones independientes y transparentes

La implementación de reformas que fortalezcan la independencia del poder judicial, los organismos de control y las instituciones anticorrupción son fundamentales para garantizar el Estado de derecho y la efectiva rendición de cuentas (Bermeo, 2016). Estas reformas deben asegurar la autonomía de estas instituciones y dotarlas de los recursos y la capacidad necesaria para cumplir con sus funciones de manera efectiva.

Paralelamente, es crucial mejorar la transparencia y el acceso a la información pública. Implementar mecanismos efectivos de acceso a la información, promover la rendición de cuentas por parte de las autoridades y fortalecer los espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones son

medidas clave para fomentar una gobernanza más abierta y democrática (Fox y Rivera, 2019).

La profesionalización del servicio público juega un papel decisivo. Implementar procesos rigurosos de selección, capacitación y evaluación del desempeño para los servidores públicos, a fin de fomentar una cultura de ética y responsabilidad, contribuirá a contar con funcionarios más competentes y comprometidos con el interés general (Inter-American Development Bank, 2016).

En conjunto, estas medidas para fortalecer la independencia, la transparencia y la profesionalización de las instituciones públicas son fundamentales para avanzar hacia una gobernanza más sólida, en la que los derechos humanos y el desarrollo sostenible sean pilares centrales.

Combate a la corrupción y promoción de la integridad

Para combatir efectivamente la corrupción, es fundamental dotar de mayor capacidad y autonomía a las instituciones encargadas de la investigación, persecución y sanción de delitos de corrupción (Organization for Economic Co-operation and Development, 2017). Estas entidades deben contar con la independencia y los recursos necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva y libre de injerencias políticas o económicas.

Es necesario implementar medidas preventivas contra la corrupción. Esto incluye el desarrollo de códigos de ética y conducta para los funcionarios públicos, la creación de mecanismos de denuncia que protejan a los denunciantes y el fortalecimiento de sistemas de control interno sólidos que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas (United Nations Development Programme, 2021). Estas medidas preventivas contribuyen a crear una cultura de integridad en el sector público, lo cual es fundamental para el funcionamiento de las instituciones y el disfrute de los derechos humanos.

El fortalecimiento de las capacidades y la autonomía de las instituciones anticorrupción, junto con la implementación de mecanismos de prevención,

son estrategias clave para combatir de manera efectiva este flagelo que socava la confianza pública y obstaculiza el desarrollo sostenible.

Promoción de una cultura de integridad

Fomentar una cultura de integridad en el sector público y privado es fundamental para combatir la corrupción y promover el respeto al estado de derecho y los derechos humanos. Según Transparency International (2023), esto implica sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos negativos de la corrupción y promover valores como la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas.

La promoción de una cultura de integridad debe ser una prioridad a escala institucional y social. En el ámbito institucional, es necesario que las organizaciones públicas y privadas implementen códigos de ética, mecanismos de denuncia y sistemas de control interno sólido, que fomenten prácticas íntegras y transparentes en el ejercicio de sus funciones.

En la escala social, es fundamental empoderar a la ciudadanía para que pueda identificar, denunciar y rechazar actos de corrupción. Esto se logra por medio de programas de educación cívica y campañas de concientización que resalten la importancia de la integridad, la honestidad y la rendición de cuentas como valores fundamentales para el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

La promoción de una cultura de integridad debe ser un esfuerzo conjunto entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Sólo mediante este trabajo colaborativo se podrán construir sociedades más justas, equitativas y resilientes, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Ampliación de la participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible destaca la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones y el monitoreo de la ges-

tión pública (ONU, 2015). Esto implica el desarrollo de mecanismos de consulta, rendición de cuentas y control social, que empoderen a la ciudadanía y fortalezcan la gobernanza democrática.

Según Bermeo (2016), es fundamental implementar mecanismos efectivos para la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas, la toma de decisiones y el seguimiento de la gestión pública. Esto permite que la ciudadanía tenga un rol activo en la definición de prioridades y en la evaluación del desempeño de las instituciones.

Fox y Rivera (2019) señalan que es crucial apoyar el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, ya que pueden actuar como contrapeso al poder y defender los derechos de la ciudadanía. Estas organizaciones juegan un papel fundamental en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Promoción de la educación cívica y la cultura de la participación

La promoción de la educación cívica y la cultura de la participación es fundamental para fortalecer la gobernanza democrática y el estado de derecho. Según el Inter-American Development Bank (2016), es crucial implementar programas de educación cívica que fomenten la participación ciudadana, el conocimiento de los derechos y la responsabilidad social.

Estos programas de educación cívica deben tener como objetivo empoderar a la ciudadanía, brindándole las herramientas y conocimientos necesarios para involucrarse activamente en los asuntos públicos. Esto incluye informar a la población sobre sus derechos y responsabilidades, así como promover valores como la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con el bien común.

La descentralización y el fortalecimiento del gobierno local también juegan un papel crucial en este proceso. Según la Organization for Economic Co-operation and Development (2017), es fundamental otorgar mayor autonomía y recursos a los gobiernos locales, de manera que puedan responder de forma más efectiva a las necesidades y demandas de las comunidades.

Al transferir competencias y recursos a los gobiernos locales, se crea un entorno más propicio para la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Las autoridades municipales, al estar más cerca de la población, pueden diseñar e implementar políticas públicas que se ajusten mejor a las realidades y prioridades de cada comunidad.

Fortalecimiento de la capacidad institucional a escala local

El fortalecimiento de la capacidad institucional a escala local es fundamental para mejorar la gobernanza y la calidad de los servicios públicos. Según el United Nations Development Programme (2021), es crucial brindar capacitación y apoyo técnico a los gobiernos locales para que puedan mejorar su capacidad de gestión.

Cuando los gobiernos locales cuentan con una mayor capacidad institucional, pueden responder de manera más efectiva a las necesidades y demandas de las comunidades a las que sirven. Esto implica, por ejemplo, que puedan diseñar e implementar políticas públicas más adaptadas a las realidades locales, gestionar de forma más eficiente los recursos disponibles y ofrecer servicios públicos de mayor calidad.

Transparency International (2023) señala que es fundamental fomentar la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones a escala local. Al implementar mecanismos de participación ciudadana, como consultas públicas, audiencias comunitarias y procesos de rendición de cuentas, se asegura una gobernanza más cercana a las necesidades de las comunidades.

Cuando la ciudadanía se involucra de manera activa en los asuntos públicos a escala local, se crea un entorno más propicio para la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza entre la población y las autoridades. Esto, a su vez, contribuye a fortalecer la legitimidad de las instituciones y a mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad.

Protección de los derechos humanos y promoción de la justicia

La protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia son elementos fundamentales para avanzar hacia una gobernanza más justa y equitativa, en línea con los objetivos de la Agenda 2030.

Un aspecto clave en este sentido es la ratificación e implementación efectiva de los tratados internacionales de derechos humanos. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2023), los Estados deben ratificar e incorporar de manera efectiva los principios de estos tratados en su legislación nacional.

La ratificación de estos instrumentos internacionales implica el compromiso de los Estados de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. Esto se traduce en la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole para hacer efectivos los derechos consagrados en dichos tratados.

La implementación efectiva de estos tratados, a su vez, requiere que los Estados armonicen su marco jurídico interno con las normas internacionales de derechos humanos. Esto incluye, por ejemplo, la adecuación de leyes, políticas públicas y prácticas institucionales para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos.

Por otra parte, los Estados deben asegurar que las víctimas de violaciones de derechos humanos tengan acceso a recursos efectivos y a una reparación adecuada. Esto implica fortalecer los sistemas de justicia y garantizar la independencia y eficacia de los órganos encargados de investigar, juzgar y sancionar estos abusos.

Fortalecimiento del sistema de justicia

El fortalecimiento del sistema de justicia es fundamental para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2022), es crucial garantizar el acceso a la

justicia para todas las personas, independientemente de su origen, condición social o cualquier otra distinción, y fortalecer la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.

El acceso a la justicia es un derecho humano básico que debe ser garantizado por los Estados. Esto implica que todas las personas, sin discriminación, deben poder acudir a los tribunales y obtener una resolución justa de sus conflictos. Para ello, es necesario eliminar las barreras económicas, sociales, culturales y geográficas que puedan impedir el acceso a la justicia, especialmente para los grupos más vulnerables de la sociedad.

Además del acceso, es fundamental fortalecer la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. Los jueces y tribunales deben ejercer sus funciones sin injerencias indebidas de otros poderes del Estado o de intereses particulares. Esto requiere la implementación de salvaguardas legales y mecanismos institucionales que protejan la autonomía de los operadores de justicia y garanticen la objetividad de sus decisiones.

El fortalecimiento de la independencia judicial es crucial para combatir la impunidad y asegurar que las violaciones de derechos humanos sean investigadas, juzgadas y sancionadas de manera efectiva. Cuando los tribunales cuentan con la debida independencia, pueden cumplir su rol de garantes de los derechos y las libertades de las personas, sin temor a represalias o influencias indebidas.

Combate a la discriminación y la violencia

El combate a la discriminación y la violencia contra grupos vulnerables es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Según la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (2023), es crucial implementar medidas concretas para combatir la discriminación y la violencia contra grupos vulnerables, como mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad y minorías étnicas o sexuales.

La discriminación y la violencia son fenómenos que vulneran gravemente los derechos humanos y obstaculizan el desarrollo sostenible. Estos

problemas afectan de manera desproporcionada a los grupos más marginados de la sociedad, impidiéndoles el pleno ejercicio de sus derechos y oportunidades.

Para abordar esta problemática, los Estados deben adoptar un enfoque integral que incluya medidas legislativas, políticas públicas, programas de sensibilización y acciones afirmativas. Esto implica, por ejemplo, la promulgación de leyes que sancionen la discriminación, la creación de mecanismos de denuncia y reparación, y el desarrollo de campañas educativas para fomentar una cultura de respeto y no violencia.

Es fundamental fortalecer los sistemas de justicia y seguridad, de manera que puedan prevenir, investigar y sancionar de manera efectiva los actos de discriminación y violencia. Esto requiere capacitar a los operadores de justicia y a las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos y perspectiva de género, así como garantizar la accesibilidad y la adaptación de los servicios a las necesidades de los grupos vulnerables.

Fortalecer la cooperación internacional

Según Rodríguez-Garavito (2017), fortalecer la cooperación internacional es fundamental para abordar los desafíos globales relacionados con el Estado de derecho y los derechos humanos. La cooperación internacional juega un papel crucial en la promoción de sociedades más justas y equitativas. Por medio del intercambio de buenas prácticas, los Estados, los organismos internacionales y la sociedad civil pueden aprender de las experiencias exitosas de otros países y adaptar soluciones efectivas a sus propios contextos. El apoyo técnico y financiero entre los actores internacionales es clave para fortalecer las capacidades institucionales y desarrollar políticas públicas que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos. Los Estados pueden beneficiarse de la asistencia de organismos multilaterales y de la cooperación entre pares para mejorar la gobernanza, combatir la corrupción y promover el Estado de derecho.

Por lo tanto, la acción coordinada entre los diferentes actores internacionales es fundamental para abordar los desafíos globales de manera integral. Los Estados, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el

sector privado deben trabajar de manera articulada y coherente para diseñar e implementar soluciones efectivas y sostenibles.

Conclusiones

Las propuestas planteadas para fortalecer las instituciones, el Estado de derecho y los derechos humanos se encuentran alineadas con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la paz, la justicia y las instituciones sólidas. El abordaje integral de estos desafíos es fundamental para avanzar hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y respetuoso de la dignidad humana.

Fortalecer las instituciones, proteger los derechos humanos y alcanzar el desarrollo sostenible son objetivos interconectados e indispensables para construir sociedades justas, equitativas y resilientes. Sin embargo, este camino se enfrenta a diversos desafíos, los cuales se manifiestan de manera particular en cada contexto.

La idea es que cada vez más se hace necesario desarrollar mecanismos eficientes para la ejecución de las sentencias judiciales, con la finalidad de garantizar que las víctimas obtengan la reparación y las autoridades rindan cuentas por sus actos. Sólo por medio de la implementación de estas medidas, en conjunto con el compromiso de los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional, se podrá avanzar hacia un acceso a la justicia más equitativo y una reparación más efectiva de las violaciones a los derechos humanos.

En general, abordar los desafíos institucionales, fortalecer la gobernanza y el Estado de derecho, y proteger y promover los derechos humanos, son elementos clave para construir sociedades más justas, equitativas y resilientes, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Referencias

- Amnistía Internacional (2022). Defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe. <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/08/americas-human-rights-defenders-under-attack/>
- Asian Development Bank (2023). Building Together: Priorities for Asia and the Pacific. <https://www.adb.org/publications>
- Balderas, F. (2024). Integridad, instituciones sólidas y transparencia en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. *Ciencias Administrativas. Teoría y praxis*. 118-131. <https://doi.org/10.46443/catyp.v20i1.368>
- Banco Mundial (2023). Homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes en América Latina y El Caribe. <https://datos.bancomundial.org/indicador/VC.IHR.PSRC.P5?locations=z1>
- Bermeo, E. (2016). *Institutional change in Latin America: A review of the literature*. *Latin American Research Review*, 51(1), 1-42. <https://www.files.ethz.ch/isn/46634/las09.pdf>
- CEPAL (2020). Informe sobre el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45731/1/S2000418_es.pdf
- CIDH (2023). Informe sobre Medidas dirigidas a Reducir el Uso Excesivo de la Fuerza. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) (2022). Asia and the Pacific SDG Progress Report 2022. <https://www.unescap.org/kp/2022/asia-and-pacific-sdg-progress-report-2022>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2023). The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. <https://www.fao.org/documents/card/en?details=cc3017en>
- Fox, J. A., & Rivera, S. (2019). *Institutional reforms and the rule of law: Lessons from Latin America*. *World Development*, 113, 111-125.
- Hammergren, L. A. (2007). *Envisioning reform: Improving judicial performance in Latin America*. Penn State Press.
- Inter-American Development Bank (2016). *Strengthening Public Management in Latin America and the Caribbean*. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank. <https://www.iadb.org/en/who-we-are/institutional-strategy>
- IWGIA (2021). Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en América Latina. <https://www.iwgia.org/es/recursos/publicaciones/3989-informe-sobre-la-situacion-de-los-pueblos-indigenas-en-amrica-latina.html>
- JOP (2019). *Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México*. Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República. <https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/estrategia-nacional-de-la-implementacion-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible-en-mexico>
- Lizama, F. (2024). *Desarrollo Municipal Sostenible génesis de la Agenda 2030 en México. Un análisis desde la agenda XXI*. Centro de Investigación y Desarrollo. Ciencia Latina Internacional.

- Méndez, J. E. (2018). La independencia judicial, un pilar fundamental del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 82, 13-30. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6810766>
- Naciones Unidas (2024). *Nuevo Pacto para el Futuro*. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/272/25/pdf/n2427225.pdf>
- Naciones Unidas (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Organización de las Naciones Unidas. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Naciones Unidas (2018). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile.
- OCDE (2019). Estudio de la OCDE sobre el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. <https://www.oecd.org/latin-america/development-in-transition/>
- OCDE (2020). *Governance for the future: Democracy and Inclusion in the SDG Era*. <https://www.oecd.org/governance/governance-for-the-future.htm>
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2021). Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. <https://www.ohchr.org/es/countries/lac-region/colombia>
- Open Society Foundations (2019). El legado de la CICIG en Guatemala. <https://www.opensocietyfoundations.org/publications/the-legacy-of-the-cicig-in-guatemala>
- Organization for Economic Co-operation and Development (2017). *Government at a Glance 2017*. Paris: OECD Publishing.
- Rettberg, A. (2020). Violencia en América Latina hoy; manifestaciones e impacto. *Revista de Estudios Sociales*, 73. <https://doi.org/10.7440/res73.2020.01>
- Rights Watch (2022). Informe Mundial 2022: Colombia. <https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/379846>
- Rodríguez-Garavito, C. (2017a). *La justicia en tiempos de odio: Reflexiones sobre el futuro de los derechos humanos*. Siglo del Hombre Editores. https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_878.pdf
- Rodríguez-Garavito, C. M. (2017 b). Business and human rights: A critical analysis. *Human Rights Quarterly*, 39(4), 1067-1092. <https://www.cambridge.org/core/books/business-and-human-rights/1F93438D6219D4D14501E1631C370F4A>
- Rothstein, B., & Teorell, J. (2008). What is quality of government? A theory of impartial government institutions. *Governance*, 21(2), 165-190.
- Sachs, J. (2015). *La era del desarrollo sostenible. Nuestro futuro está en juego: incorpórenos el desarrollo sostenible a la agenda política mundial*. Ediciones Deusto.
- Samper, J. (2016). Rendición de cuentas y derechos humanos: apuntes para un modelo teórico. *Revista Derecho del Estado*, (36), 237-266. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/4697>
- Sanabria, J. (2023). *La implementación del ODS 16 en América Latina. Una mirada basada en la promoción y protección de los derechos humanos*. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/136039/1/La_implementacion_del_ODS_16_en_America_Latina__Sanabria_Vivas_Jorge_Elieser.pdf

- SDSN (2024). Sustainable Development Report 2024. The SDGs and the UN Summit of the Future. Sustainable Development Solutions Network. <https://www.unsdsn.org/resources/the-sustainable-development-report-2024/>
- Transparency International. (2023). Corruption Perception Index 2022. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- United Nations Development Programme. (2021). Fighting Corruption in the Public Sector. New York: UNDP.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2022). Making Peace with Nature: A UNEP Manifesto. <https://www.unep.org/resources/making-peace-nature>
- Villanueva, R. (2019). *La implementación del ODS 16 y los compromisos de la cooperación internacional*. Documentos de Trabajo. 20. Fundación Carolina.
- Zamora, A. (2013). Rendición de cuentas y derechos humanos: apuntes para un modelo teórico. *Revista Derecho del Estado*, (31), 325-352. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3573>